REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
Valledupar, veinte (20) de Octubre de 2020

INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
RADICADO: 20001-31-03-002-2019-00046-00
DEMANDANTE: LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA
DEMANDADO: FABIAN ALFONSO CHAPARRO FONSECA
APODERADO: IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL

Procede el Despacho a resolver el INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS, iniciado por el Dr. IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL, contra su poderdante LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 y 129 del C. G. del P.

Así, se resuelve el presente incidente de regulación de honorarios, teniendo en cuenta los siguientes;

ANTECEDENTES

El Dr. IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL, en su escrito de INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS, solicitó al despacho se condene a la parte incidentada a cancelar la suma de dinero por concepto de honorarios a los que tiene derecho, con ocasión a la labor prestada en el proceso referenciado. Lo anterior, en virtud de que el señor LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA, incumplió la obligación pactada con él, respecto a los honorarios profesionales, habida cuenta que se niega al pago de estos al incidentalista, los cuales se estiman en la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS (\$128,118,000), es decir, el 30 % del valor de las pretensiones en el proceso en referencia.

Al incidente de regulación de honorarios, se inició través del auto de fecha 05 de agosto de 2020, corriéndose el traslado respectivo a la parte demandante. Éste contestó a dicho traslado en nombre propio, aportando dicha contestación el día 12 de agosto de 2020, sin embargo, se de advertir desde ya que el demandado no cumple con los lineamientos exigidos por el art. 73 del C. G. del P., esto es, *Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa*, circunstancia esta última que no es el caso, habida cuenta que se trata de un proceso de mayor cuantía.

Tramitado en legal forma, se tendrán en cuenta las pruebas documentales aportadas por las partes, consistentes en: **Parte incidentante: 1)** Tarifa de honorarios profesionales de la corporación Colegio Nacional de Abogados., **2)** El expediente del trámite del proceso de la referencia y **3)** Copia de la denuncia por estafa en contar de LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA **Parte incidentada:** Presentó un escrito, sin embargo, no cuenta con derecho de postulación. Además, se deja constancia que anexó unos documentos, sin solicitar que se tengan como prueba, tales como: Acta de no conciliación de fecha 18 de marzo de 2020, un pantallazo de una conversación de Whatsapp, y los otros documentos que se encuentran en el expediente, como son poder otorgado Dr. IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL y la denuncia aportada por este último.

Posteriormente el señor PRADA GARCIA, le otorga poder al Doctor DELCIES CORDOBA OSPINO, quien contesta el Incidente, el día 20 de agosto de 2020.

Por no haber más pruebas que el despacho considere pertinentes practicar, se procede a resolver el incidente propuesto, fundado en las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema de la fijación de honorarios parece librado a la autonomía privada y, en ese sentido, irrelevante en términos de derechos fundamentales, esta perspectiva se modifica cuando el pacto entre personas deviene en objeto de investigación disciplinaria y puede concluir con una sentencia como resultado de un proceso en el cual se deben respetar todos los principios que prescribe en ese sentido la Constitución Política.

Ahora bien, de entrada, el despacho advierte que no observa la revocatoria del mandato que daría inicio al incidente de regulación de honorarios a voces del art. 76 del C. G. del P., sin embargo, al respecto tenemos que si bien no existe dicha revocatoria, la mencionada norma no establece que sucede frente a eventos como el que ahora nos convoca, esto es, la regulación de honorarios de un proceso que llegado a su fin de instancia, el poderdante se niega al pago de los honorarios de su apoderado. Al respecto se puede ver que en la sentencia T-1214 de 2003, la Corte Constitucional, al respecto tiene como antecedente *“contiene la providencia enjuiciada para desestimar la afirmación del accionante de que no hubo revocatoria del poder otorgado, es razonable y atendible, ya que la actuación de la poderdante consistente en solicitar la entrega del inmueble materia del proceso reivindicatorio fue interpretada razonablemente como revocatoria del poder conferido.”*, dicha sentencia deja de un lado el debate de la revocatoria del poder, considerando que el cumplimiento del objeto de mandato por parte del mandatario, es equivalente a dicho evento, esto es, la revocatoria, y por tanto, la Corte entre sus apartes considera:

“En la providencia que es objeto de la acción de tutela la accionada manifiesta que el artículo 69 del CPC confiere al juez civil la facultad de resolver en definitiva y mediante el trámite incidental “una cuestión que por su naturaleza sería del conocimiento de jueces de distinta especialidad concretamente la laboral, atribución que encuentra plausible justificación en la necesidad de resguardar principios elementales como el de la economía procesal y el de la inmediación”. Agrega, que el poder otorgado al incidentante “no finalizó con el fallo que desató la apelación en segundo grado, por el contrario culminaba con la diligencia de restitución del predio”.”

Para la Sala las razones que presenta la accionada para justificar su competencia no son arbitrarias o caprichosas, pues son el producto de su facultad interpretativa, la cual no se revela como contraria a las normas procesales civiles que regulan la materia. Es cierto que en relación con este punto uno de los Magistrados de la Sala accionada salvó su voto por considerar que para demandar los honorarios profesionales por la vía del artículo 69 del CPC se requería sentencia favorable y ejecutoriada de casación, pues según su parecer en estos términos estaba pactado el contrato de servicios profesionales suscrito entre Casa Club y el doctor Gómez García. Pero esta circunstancia lejos de poner en evidencia una actitud arbitraria por parte de la accionada, desdibuja la configuración de la vía de hecho alegada, toda vez que hace notar que se trata de puntos de vista diferentes en torno a un punto de derecho como es la competencia para conocer del asunto.

Por tal razón, la Sala comparte los planteamientos de la Sala de Casación Civil, en el sentido de que para la regulación de sus honorarios profesionales el ex apoderado a quien se le ha revocado el poder cuenta con una doble opción. De un lado, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 del CPC, dentro de los 30 días siguientes al de notificación del auto que admite dicha revocación puede pedirle al juez de la causa que regule sus honorarios profesionales mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso, sin que en este evento el monto de los honorarios fijados “pueda exceder del valor de los honorarios pactados”. En esta hipótesis el ex apoderado puede solicitarle al juez la regulación de sus honorarios sea que no tenga contrato profesional o que los honorarios pactados contemplen el desempeño total de la gestión. La prueba fundamental será la de peritos abogados, pero si hay contrato éste debe tenerse en cuenta pues tal como lo ordena la norma en comento no pueden fijarse en cuantía superior a la pactada. Y si las partes no piden pruebas el juez debe hacer la regulación sin exceder el máximo pactado¹⁷. Y de otro lado, el ex apoderado tiene la posibilidad de acudir ante la justicia laboral, ya que en virtud de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 ella conoce de “los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive”. (subraya fuera de texto)

En ese sentido, debemos tener en cuenta que en lo que se refiere a los poderes, sin bien el Código General del Proceso, pareciera que presentara varios vacíos, esto obedece a que nuestra norma sustancial, en este caso, el Código Civil, nos trae un compendio por así decir, de normas que desarrollan claramente el mandato. Al respecto tenemos que el artículo 2144 de dicha norma, establece: “**Extensión del régimen del mandato.** Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.”, es decir, por disposición legal, los poderes otorgados para el trámite de un proceso, además de lo regulado por la Ley Procesal, están sometidos al imperio de la Ley Sustancial.

Ahora bien, surge entonces el primer problema jurídico, y es: *¿termina el mandato, como consecuencia de la terminación del proceso para el cual fue otorgado?*, pues, pareciera que la norma procesal hubiese dejado ese vacío legal, sin embargo, esto se debe a que, dicha regulación carecería de sentido, por cuanto que la norma procesal ha sido confeccionada para lo que surja durante el trámite del proceso, y no para las regulaciones de los fenómenos jurídicos que surjan a partir de éste, pues para ellos, existe la Ley sustancial.

En ese sentido, el Código Civil, que regula lo concerniente al mandato, establece en su art. 2189, que una de las causales de terminación de éste es “*Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato*”, que, en este caso, sería la culminación del proceso, pues el poder conferido al abogado Valera Rangel, quedó delimitado por esa condición.

Así pues, dado que finalizó el contrato de mandato entre los hoy litigantes, y ante la negativa del mandante de cumplir con la obligación del pago de los honorarios, circunstancia que se encuentra probada; nace para su el ex apoderado la facultad, de solicitar la regulación de sus honorarios sea que no tenga contrato profesional o que los honorarios pactados contemplen el desempeño total de la gestión. Teniendo la facultad el abogado Iván Valera,

de acudir ante la justicia laboral, ya que en virtud de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 ella conoce de “los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive” o bien podía acudir, como en efecto lo hizo, al trámite incidental previsto en la norma procesal, con el fin de obtener la regulación de sus honorarios profesionales, descartando la vía de la justicia ordinaria laboral.

En estos términos, dilucidado la procedibilidad, el despacho se enfocará de fondo a la estimación de los honorarios pretendidos. Así, cabe resaltar que la determinación del monto a cobrar por los profesionales del derecho con ocasión de la prestación de servicios especializados, *prima facie*, se libra de acuerdo a la manifestación de voluntades entre el cliente y el respectivo abogado. Debido a la gran cantidad de inconvenientes que en la práctica genera la mencionada indefinición, las diferentes legislaciones han intentado regular la materia, valiéndose de tarifas fijadas por los colegios de abogados, por la estricta vigilancia de los pactos de *cuota litis* y por criterios rectores de origen jurisprudencial. Las normas que sistematizan la materia se encuentran, las más de las veces, consagradas en códigos de ética o deontológicos del ejercicio de la abogacía que, además, señalan las faltas, las sanciones, el procedimiento y los órganos competentes para investigar y penar a los mencionados profesionales.

El artículo 76 del C. G. P. prevé: “(...)podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral”.

Según la norma transcrita, la regulación de honorarios no podrá exceder el valor de los pactados en el contrato y, en el caso en estudio se observa que éstos fueron acordados mediante contrato verbal de prestación de servicios profesionales.

Analizado el escrito presentado, la finalidad del jurista incidentante, es que se le fijen los honorarios por su gestión realizada en el proceso ejecutivo.

Ahora, antes de entrar a definir como tal, lo que nos convoca, sea oportuno el momento para advertir que, posteriormente al término otorgado para el pronunciamiento del traslado, es decir, de manera extemporánea el Dr. Córdoba Ospino, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado en este incidente, como que quiera que ha habido una indebida notificación, pues según este no se le hizo entrega de copia de la demanda incidental; pretensión a la que desde ya el despacho rechaza, habida cuenta que habiéndose expedido el auto fechado 05 de agosto de 2020 y notificado por estado el día seis (06) de agosto de 2020, mediante el cual se le corre traslado al señor LUIS ALFREDO PRADA GARCIA, el mismo fue publicado en el micrositio del juzgado y/o página de la Rama Judicial, en el link correspondiente a los estados, a lo que el señor debió acceder. Circunstancia que debió ocurrir así por cuanto, el señor Prada García dentro del término para ello y, días antes de otorgarle poder, ya había contestado el mismo, a manera propia, frente al incidente, luego entonces se deduce que si tenía conocimiento de todo el contenido del Incidente respectivo dejando sin fundamento la manifestación esgrimida por el apoderado judicial.

En este punto tenemos entonces, que es cierto, pues está demostrado en el expediente, que el abogado IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL, actuó como apoderado de la parte demandante en el proceso de la referencia. Ahora bien, no obstante que el incidentado LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA, no actuó a través de apoderado, dentro del término aportó documentos que dan indicios de que, de su parte, los honorarios que fueron pactados por el 20% de las pretensiones y no del 30% como manifiesta quien fuere su apoderado.

En ese sentido y no existiendo certeza de lo pactado entre las partes, no queda al despacho sino recurrir a la jurisprudencia vigente para el tema concreto, y no es más que a falta de una regulación legal respecto de los honorarios profesionales de los abogados, se debe recurrir a las tablas fijadas por Colegios de Abogados, encargados de dichos temas, teniendo en cuenta igualmente (i) el trabajo efectivamente realizado por el litigante, (ii) la importancia y (iii) la cuantía del asunto. Ha dicho al respecto el Consejo: *“Al decidir sobre la desproporción como elemento configurativo de este tipo de falta disciplinaria, se han de tener en cuenta, y se han tenido en cuenta siempre, por la jurisprudencia y la doctrina, otras circunstancias como incidentes para la definición de aquel (...). Y por eso, precisamente, las tarifas que expiden los colegios de abogados, sobre honorarios profesionales, tampoco tienen como solo elemento determinante de aquellos el trabajo en sí, sino los otros señalados. (...) sabido es que la jurisprudencia siempre ha aceptado las mencionadas tarifas como buena guía para definir si el cobro que se haya hecho por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado y por tanto ilícito, realmente lo fue o no”*¹.
(Subrayas fuera del texto)

Así pues, teniendo en cuenta que la jurisprudencia sobre la materia ha fijado cinco (05) criterios para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados.

Así, teniendo en cuenta el material probatorio que se arrimó al incidente para establecer el monto de los honorarios del incidentalista, no queda más que fijar dichos honorarios en un monto de conformidad a lo expuesto en el inciso anterior, es decir, la tabla de honorarios confeccionada por el colegio de abogados. No obstante lo anterior, es de advertir, que el despacho parte de dos extremos, por un lado el incidentante manifiesta que lo pactado asciende al 30% de las pretensiones y por otro, el incidentado manifiesta que lo pactado fue el 20% de las pretensiones, siendo entonces dichos extremos entre los que se procederá a tasar los correspondientes honorarios.

Entonces, para fijar dichos honorarios en un monto de conformidad con lo dispuesto en la respectiva tabla de tarifas de honorarios, encontramos que las partes pueden acordar hasta el 50% de las pretensiones cuando el poderdante solo firma el poder y los demás gastos corren por cuenta del abogado. Al respecto vale decir, que si bien el señor Luis Alfredo García, pretende desconocer que los gastos procesales hayan corrido por cuenta del

¹ Régimen Disciplinario de los Abogados, normas y jurisprudencia. Publicación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Director Leovigildo Andrade, Tomo I. Santafé de Bogotá 1998-1999, pág. 146.

demandado, pues manifiesta que el se encargó personalmente del pago de los gastos generados por la búsqueda de información sobre los bienes del demandado, ello contrasta con los documentos visibles en el expediente, pues de las facturas y documentos anexados, se extrae que el apoderado judicial, hoy incidentante, acarreo con los gastos de las notificaciones, las inscripciones de las medidas cautelares y gestionó la entrega de dichos documentos de manera personal.

En cuanto a la gestión, tenemos que el señor Prada García otorgó poder para actuar a Valera Rangel, el día 20 de marzo de 2019, y éste por su parte presentó la demanda el día 21 de marzo del mismo año, es decir, un día después. Posteriormente esta agencia judicial, libró mandamiento de pago el día 28 de marzo de 2019 y además decretó las medidas cautelares solicitadas por el apoderado judicial, oficios que fueron retirados por éste el 29 de marzo de la misma anualidad, es decir, el día que salieron en estado. Según se observa en el expediente, dichos oficios fueron radicados entre el mismo 29 de marzo y el 01 de abril. En lo que respecta a las notificaciones, según constancia de Servientrega, el Dr. Iván Valera, envió la citación para notificación personal al demandado el día 5 de abril de 2019 y la notificación por aviso el 23 de abril del mismo año, es decir, no transcurriendo ni siquiera un mes calendario desde la expedición del mandamiento de pago, por lo que no comprende esta agencia a que se refiere que el profesional del derecho a quien encomendó su litigio, nunca estuvo al tanto del proceso.

Ahora bien, tal fue la gestión hecha por el profesional, que el 6 de mayo de 2019, la parte demandada contestó la demanda, y propuso excepciones, de las cuales se corrió traslado el 24 de mayo de 2019, habiendo un pronunciamiento por parte de Iván Andrés Valera Rangel, en virtud del poder que le fue conferido, pronunciándose frente a las excepciones propuestas por el demandado.

Posteriormente fue fijada fecha para audiencia el día 30 de septiembre de 2019, la cual no se llevó a cabo por circunstancias ajenas a las partes, sin embargo, la misma fue fijada nuevamente, y celebrada el día 06 de noviembre de 2019.

Ahora bien, tenemos que en dicha audiencia se dio fin al litigio, acordando un plazo, como quiera que el demandante llegó a un acuerdo con el demandado, sin embargo, según consta en los documentos, no canceló a su apoderado, los honorarios profesionales que habian sido pactados, estando en mora de su pago desde dicha fecha cuando terminó la litis y, conforme se desprende tanto del dicho del apoderado judicial incidentante como del hoy incidentado

En esos términos, tenemos que la cuantía del proceso ascendió a CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$427.063.000,00), según se desprende del auto que libró mandamiento de pago de fecha 28 de marzo de 2019. Así, el despacho observando que cierto es que el apoderado judicial hoy incidentante, acarreo con los gastos procesales y teniendo en cuenta que fue diligente en la labor que le fue encomendada, tasará los honorarios en un 25%, como quiera que el proceso no necesito de otra instancia y tasando los mismos como punto medio entre los manifestado por él y por su poderdante, ajustándose esto a lo dispuesto en las tablas vigentes.

Así, el despacho teniendo en cuenta la gestión realizada por el incidentante en el proceso de la referencia, la cual correspondió a la presentación de la demanda, notificación de la parte demandada, descorrer traslado de las contestaciones y asistir a las audiencias de primera instancia, cumpliendo con las gestiones propias de su profesión, se fijaran los honorarios en la suma de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$106.765.750), equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones en el proceso, según fue acordado por las partes, debiendo ser pagados estos desde el día 06 de noviembre de 2019.

Por lo anterior, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR-CESAR, administrando justicia,

RESUELVE:

PRIMERO: Regular los honorarios solicitados por el Dr. IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL en contra del demandante LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA, por su gestión realizada en el presente expediente, por las razones expuestas en el presente auto.

SEGUNDO: Tasar los honorarios en la suma de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$106.765.750), equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones en el proceso, según fue acordado por las partes, a favor del Dr. IVÁN ANDRÉS VALERA RANGEL y a cargo de LUIS ALFREDO PRADA GARCÍA, exigibles desde el día 06 de noviembre de 2019.

TERCERO: Reconózcase personería al doctor DELCIDES CORDOBA OSPINO, como apoderado judicial del señor LUIS ALFREDO PRADA GARCIA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

GERMAN DAZA ARIZA
JUEZ